

La educación de jóvenes y adultos y en contextos de privación de libertad en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (LEN). Políticas derivadas e interrogantes actuales

Autora: Acin, Alicia Beatriz

Pertenencia Institucional: Universidad Nacional de Córdoba

Mesa de trabajo: 8 Educación rural y de jóvenes y adultos

Correo electrónico: acinalicia@gmail.com

Resumen

La ponencia se centra en el lugar de la educación de jóvenes y adultos y la educación en contextos de privación de libertad en la LEN y en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE) correspondientes, en la orientación que esta concepción le imprimió a las políticas del Ministerio de Educación de la nación y la que habilitó para las jurisdicciones, más precisamente en Córdoba.

Surge de resultados de la tesis doctoral “La educación secundaria de adultos en la actualidad. Un estudio comparado entre Córdoba (Argentina) y Cataluña (España)” y de la investigación “Producción de sentido y subjetividad en el espacio carcelar: acceso a derechos y a justicia”.

A partir del análisis de la normativa y de las políticas nacionales y provinciales que inspiró, se sostiene que el principio de la educación como bien público y derecho social representó un giro sustantivo en las políticas para la EPJA y en contextos de encierro, no obstante los aspectos insuficientes de algunas acciones y de los variados obstáculos para el acceso a la educación que aún persisten. Finaliza con interrogantes sobre el derrotero de esta normativa en el marco de un contexto socio político, económico y cultural sustancialmente diferente a aquél que favoreció su surgimiento y de los indicios que la actual política educativa ofrece.

Palabras clave: Educación, modalidades, derecho, políticas, concepciones.

Introducción

La educación y el conocimiento como bien público y derecho social es el principio que ha orientado la política educativa en Argentina a partir de la sanción de la LEN, siendo el Estado el responsable de generar las condiciones para hacer efectivo ese derecho en cada nivel y modalidad que integra el sistema educativo.

Junto a ese principio, la extensión de la obligatoriedad escolar a 12 años generó acciones y programas para la educación secundaria y para todas las modalidades, entre ellas, la educación permanente de jóvenes y adultos (EPJA)ⁱ y la educación en contextos de privación de libertad.

En esta comunicación analizo cómo son consideradas estas dos modalidades –relacionadas entre sí en función de los sujetos destinatarios y de la dependencia administrativa– en la LEN y en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), la orientación que esta concepción le imprimió a las políticas del Ministerio de Educación de la nación y lo que habilitó para las jurisdicciones, particularmente en Córdoba. Asimismo, en el marco de un contexto socio político, económico y cultural opuesto al que le dio origen y de los indicios que la actual política educativa ofrece, me interrogo sobre las vicisitudes posibles de esta normativa.

Para la elaboración de la ponencia retomo resultados de la tesis doctoral “La educación secundaria de adultos en la actualidad. Un estudio comparado entre Córdoba (Argentina) y Cataluña (España)”ⁱⁱ y de la investigación “Producción de sentido y subjetividad en el espacio carcelar: acceso a derechos y a justicia”, en curso.ⁱⁱⁱ

En primer lugar me refiero al lugar que ocupan ambas modalidades en la LEN y en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), luego analizo su incidencia en las políticas nacionales y jurisdiccionales para el sector y finalizo con algunos interrogantes acerca de la pervivencia de la concepción que la LEN asume para la educación en el actual contexto socio político.

La educación de jóvenes y adultos y en contextos de privación de libertad en la normativa vigente y en la política educativa

Las políticas, entendidas como formas de intervención del estado en relación con una cuestión que suscita interés, desarrolladas en la década de 2.000 para las modalidades mencionadas son fruto de un proceso acumulativo que precede a la LEN, aunque ella y la normativa posterior fueron centrales en ese recorrido, de allí la importancia de efectuar un análisis detallado.

A fines de 1.999 con el gobierno de la Alianza para la Educación, la Justicia y el Trabajo se reinstaló el tema en la agenda pública bajo una concepción distinta a la que le imprimió la Ley Federal de Educación N° 24.195. En el breve período de gobierno de esa coalición se realizaron esfuerzos tendientes a redefinir políticas de estado para la EPJA respecto a formas de gestión y organización curricular e intentos de democratizar la modalidad, aunque realizados con la normativa de la reforma neoliberal (Rodríguez, 2.008).

Según la misma autora, en la gestión de gobierno del presidente Kirchner se reorientó el rumbo del país y se sentaron nuevas bases para la educación general, la formación profesional (FP) y la EPJA a través de las Leyes de Financiamiento Educativo N° 26.075/05 y de Educación Técnico Profesional N° 26.058. Ambas Leyes apuntaron a fortalecer el papel del estado nacional en la dirección de las políticas, garantizar el financiamiento educativo en las jurisdicciones y recuperar la formación para el trabajo desde la esfera pedagógica. Sin embargo, si bien las políticas habían recuperado parcialmente el protagonismo y la responsabilidad de los estados provinciales y del estado nacional, no se había asumido la atención de los jóvenes y adultos con déficit educativo de manera prioritaria ni existían ámbitos federales de diseño específico, a raíz de lo cual cada provincia implementaba sus políticas, sin contar con lineamientos ni orientaciones comunes.

A partir de la sanción de la LEN y la concepción que sustenta, la educación se constituyó en una prioridad nacional y una política de estado, al que le compete la responsabilidad indelegable de garantizarla para todos los habitantes, bajo la responsabilidad del estado nacional en fijar la política educativa a fin de consolidar la unidad nacional.

Entre los fines y objetivos de la política educativa nacional, la LEN refiere a la educación permanente, al desarrollo de las capacidades y oportunidades de estudio y aprendizaje necesarios para la educación a lo largo de la vida, así como al acceso y las condiciones para

la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, para lo cual se asegura la gratuidad de los servicios de gestión estatal en todos los niveles y modalidades.

Asimismo, la LEN reestructura el sistema educativo en los cuatro niveles y ocho modalidades, entendiendo por tales las *opciones organizativas y/o curriculares de la educación común dentro de uno o más niveles educativos*, que atienden *requerimientos específicos de formación y particularidades permanentes o temporales, personales y/o contextuales a fin de garantizar la igualdad en el derecho a la educación* (art. 17).

El carácter de modalidad que la LEN le otorga a la EPJA marca una diferencia sustantiva con el de régimen, que establecía la Ley Federal de Educación. La diferencia radica en que una modalidad es considerada *parte de la educación común*, más allá de las adecuaciones que se realicen en función de los destinatarios y los contextos. En cuanto a las modalidades objeto de análisis, la EPJA está contemplada en los Art. 46 a 48 del Cap. IX y la Educación en Contextos de Privación de Libertad en los Art. 55 a 59 del Cap. XII.

La finalidad de la EPJA es garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y brindar posibilidades de educación durante toda la vida. A tal fin recomienda la articulación de los programas y acciones de EPJA del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las jurisdicciones con otros Ministerios, la vinculación con el mundo de la producción y el trabajo, y contar con una organización curricular e institucional que favorezca ese propósito.

La finalidad de la modalidad Educación en Contextos de Privación de Libertad es garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad a fin de promover su formación integral y desarrollo pleno. Por ello, los objetivos enfatizan el derecho de las personas privadas de libertad a la educación y a la capacitación técnico profesional en cualquiera de los niveles y modalidades, a participar en manifestaciones culturales, artísticas, físicas y deportivas, y remarcan la contribución de la educación y la cultura a la inclusión social de las personas privadas de libertad.

Las disposiciones de la LEN se especifican a través de las Resoluciones CFE N° 118/2010 y N° 127/2010, aprobadas en el gobierno de Cristina Fernández. La importancia de ambas

Resoluciones reside en los lineamientos que instauran para el conjunto del país, como todas la Resoluciones del CFE, ofreciendo un marco común a partir del cual las jurisdicciones delimitan las políticas, según sus atribuciones.

Lineamientos políticos de la Resolución CFE N° 118/2010

Esta Resolución aprueba los documentos “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos - Documento Base” y “Lineamientos Curriculares para la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos”, referidos a la especificidad, a la organización de la modalidad y a un marco general para futuros diseños curriculares.

El Documento Base define educación permanente, igualdad y equidad, calidad, formación integral, sujetos, organización de la modalidad y vinculación con el contexto, considerados aspectos clave para reafirmar la construcción de la especificidad de la modalidad. La educación permanente, orientada a incentivar el interés y el deseo por el estudio, desde un enfoque crítico, problematizador y emancipatorio, es la noción que propone para los centros y las políticas educativas para jóvenes y adultos, en la intención de superar la perspectiva compensatoria.

Es responsabilidad del Estado promover la igualdad y la equidad, no desvinculada de la calidad, y esto se relaciona con el financiamiento y las estructuras formativas. La calidad se define por el reconocimiento de la heterogeneidad de los sujetos destinatarios y la incorporación de herramientas de análisis, crítica y transformación de la sociedad en la propuesta curricular. Por ello, enfatiza la formación integral orientada al desempeño social, al ejercicio pleno de la ciudadanía y al acceso a estudios superiores o la orientación hacia un campo profesional/laboral.

El documento reconoce, asimismo, la heterogeneidad de experiencias vitales, expectativas, motivaciones y necesidades respecto del aprendizaje, y promueve la integración de saberes contruidos en esas experiencias y en la educación no formal. Subraya una trama social compleja como condicionante de la interrupción de la escolaridad o la falta de acceso a ella, en lugar de responsabilizar a los estudiantes, y promueve una educación basada en la confianza de los sujetos, en lo que pueden aportar para sí y para su comunidad.

En cuanto a la organización de la modalidad, considera a la escuela como ámbito significativo de formación y socialización y lugar privilegiado para desarrollar proyectos orientados a transformar la realidad. Propone un modelo institucional inclusivo, respetuoso de la heterogeneidad de los sujetos, vinculado con el entorno y sustentado en la participación democrática de todos los actores. Por ello, caracteriza a los centros educativos de adultos como instituciones abiertas al contexto, flexibles en la organización de espacios y tiempos, de calidad en cuanto a la relevancia de los saberes, con un régimen académico y de convivencia específicos y que atiendan a las otras modalidades del sistema educativo.

En el documento Lineamientos Curriculares se promueve el vínculo de los proyectos educativos con los sectores laborales o de pertenencia de los estudiantes, las articulaciones entre las distintas modalidades y la eliminación de las barreras formativas entre las ofertas de las jurisdicciones. A su vez, se plantea educar en la diversidad con relación a las culturas regionales o sectoriales, entendidas como manifestaciones particulares de la cultura nacional, por lo que se propone educar para lo mismo.

Propone un diseño de currículo modular, basado en los criterios de flexibilidad en tiempos y espacios, y apertura a la realidad de los estudiantes a fin de contextualizar los contenidos de enseñanza. El enfoque de aprendizaje se basa en el desarrollo y construcción de capacidades, como una alternativa a la estructura escolarizada, sea centrada en el enciclopedismo o en el logro de competencias. Los ejes fundamentales de la propuesta curricular –interacciones humanas en contextos diversos, educación y trabajo (entendido como un factor de desarrollo personal, comunitario y ciudadano para el desarrollo de una sociedad más justa, solidaria y humana), y educación como fortalecimiento de la ciudadanía– son claves desde el punto de vista social, económico y político.

Lineamientos políticos de la Resolución del CFE N° 127/2010

Esta resolución aprueba el documento “La educación en contextos de privación de la libertad en el sistema educativo nacional”. Dicha modalidad comprende a personas involucradas en procesos judiciales alojadas en tres tipos de instituciones de encierro: unidades penales, institutos cerrados para jóvenes y adolescentes acusados de la comisión

de delitos, y centros de tratamiento de adicciones de régimen cerrado o de contención acentuada.

El título expresa la idea que vertebra la política para la modalidad: que la educación de las personas privadas de libertad es parte de la educación común para todos los ciudadanos que el sistema educativo ofrece, a diferencia de la educación regida por la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660, considerada parte del tratamiento penitenciario. En esa Ley la educación como derecho en última instancia se subordinaba al tratamiento penitenciario y vestigios de esto aún perviven pese a lo que estipula su modificatoria, la Ley N° 26.695 (Acin & Madrid, 2015). Por esto, el documento propicia que se revise la concepción de la educación como parte del tratamiento o un beneficio que se otorga discrecionalmente, arraigada en los organismos de seguridad, y determina que en todas las unidades de detención del país las ofertas educativas de los niveles obligatorios y los docentes a cargo dependen de los sistemas educativos respectivos. A partir de esas consideraciones, la función de la escuela en estos contextos es concebir a los detenidos como sujetos de derecho y ayudar a reducir la vulnerabilidad y/o a mejorar la situación de los alumnos en el ámbito personal, emocional y social.

El documento aclara que las ofertas educativas de los niveles obligatorios no se diferencian de las escuelas externas a fin de garantizar la calidad educativa y la continuidad de los estudios, independientemente de las adecuaciones relacionadas con la especificidad del contexto, tales como incorporar estudiantes en cualquier momento del año a fin de destinar el mayor tiempo posible a la educación mientras permanecen detenidos. Asimismo, que el derecho a la educación comprende a los trabajadores de la seguridad mediante su participación en las ofertas educativas externas de la modalidad EPJA y propuestas de capacitación sobre ciudadanía y derechos humanos, cuestión clave dada la función que ejercen y el sector social del cual provienen.

Incidencia de la normativa vigente en las políticas nacionales y jurisdiccionales de EDJA

¿Cuáles son las derivaciones de la normativa analizada en EDJA y en contextos de privación de la libertad en las políticas implementadas en la década de 2.000?

Cabe señalar el papel del estado nacional en la definición de orientaciones federales relativas a estas modalidades, como ya se dijo. Ese papel protagónico se tradujo en la creación de unidades gubernamentales encargadas de la cuestión –Dirección Nacional de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y Coordinación Nacional de Educación en Contextos de Encierro– que trabajaron en estrecha relación con las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, en el diseño y financiamiento de políticas, planes y programas por parte del Ministerio de Educación de la nación vehiculizados a través de los Ministerios provinciales.

En las jurisdicciones cuyos sistemas educativos cuentan con menor financiamiento y escaso desarrollo, las políticas y los programas nacionales constituyeron el eje de las políticas provinciales, mientras que en otras como Córdoba significaron un respaldo a iniciativas propias ya implementadas o a desarrollar, además del financiamiento para los planes y programas.

A modo de ejemplo, los debates generados en la Mesa Federal de EPJA abonaron las discusiones que sustentan el cambio curricular para la educación secundaria presencial en la provincia, iniciado en 2011. Las capacitaciones docentes que acompañaron la puesta en marcha de los currículos de la modalidad y la determinación de opciones de cursado semipresencial e instancias de terminalidad educativa en el nivel primario, además del secundario para el que ya existía, recuperan algunos aspectos de la Resol. N° 118/10. Asimismo, acorde a esa Resolución y a otras del CFE, se elaboró un nuevo Régimen Académico, plasmado en la Resol. 001/15 DGEJyA-DIPE para la educación primaria y secundaria presencial.

En cuanto a los planes y programas, se destacan varios de distinto orden y alcance que han tenido incidencia en Córdoba. Ellos son: el Plan FinEs, fundamentalmente en la versión deudores de materias, los Planes de Mejora Institucional, el Programa Nacional Parlamento Juvenil Mercosur, el Programa Nacional de Ajedrez Educativo (viabilizado a través del Programa Provincial de Ajedrez Educativo dependiente de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa) y el Plan Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela, implementado para todos los docentes de la modalidad EPJA con contenidos y

actividades específicas. Según su finalidad, esos Planes y Programas se orientaron a: la terminalidad educativa; la implementación de proyectos para la transformación del modelo pedagógico institucional de la educación secundaria; la formación ética para los estudiantes apuntando a producir una conciencia solidaria, plural y respetuosa de los derechos humanos; la promoción en el ámbito escolar de un juego escasamente conocido por los estudiantes que contribuye al desarrollo del pensamiento estratégico; y la formación docente a gran escala, con impacto en el nivel institucional.

Respecto a la educación en contextos de privación de la libertad, el principal efecto de la transferencia de competencias del Ministerio de Justicia al Ministerio de Educación fue inaugurar la educación en las prisiones, centros socio educativos y centros de tratamiento de adicciones bajo la concepción del derecho a la educación. Gutiérrez (2012:240) sintetiza sus implicancias en “despegar a la educación en la cárcel de lo carcelario”; y de este modo, que la educación no esté atada al tratamiento, que en el espacio de la escuela y mientras el interno esté en clase sea un alumno, que la autoridad resida en el docente, no en el guardia, y que el rol docente sea incompatible con el de agente penitenciario. Vinculado a ello, se produjo una ampliación de la cobertura educativa en las prisiones al abarcar a los procesados, quienes representan aproximadamente el 75% de la población en las cárceles, y no sólo a los condenados.

Finalmente, a fin de acompañar los cambios que propone la Resolución 127/10, en 2.008 el CFE aprobó el Postítulo Especialización Docente de Nivel Superior Educación en Contextos de Encierro, el cual otorga un marco específico y dota de herramientas pedagógicas a los docentes en ejercicio para su desempeño en la escuela al interior de esos contextos.

En Córdoba, en virtud de una de las opciones que la Resol. N° 127/10 propone, se creó la Coordinación de Educación en Contextos de Encierro, encargada de los aspectos inherentes a la educación en estos contextos dentro de la DGEJA; entre ellos, coordinar y afianzar la educación en establecimientos penitenciarios y en centros socio educativos que se ofrecía desde 2.003 y 2.004, la capacitación a los docentes que cumplen su labor en las escuelas en estos contextos y a integrantes del Servicio Penitenciario a través del Postítulo mencionado.

Por efecto de la extensión de la obligatoriedad escolar, se inició la educación secundaria en la mayoría de los anexos educativos en los establecimientos penitenciarios. A su vez, la extensión de programas nacionales favoreció el acceso a bienes educativos y culturales antes impensados en estos contextos. Se incorporaron bibliotecas en todas las unidades penales e institutos de adolescentes, con la provisión de recursos materiales y capacitación para los docentes bibliotecarios designados por el Ministerio de Educación provincial, abiertas a todas las personas privadas de libertad sin exigencia de que asistan a la escuela. Se abrieron Centros de Acción Juvenil (CAJ) en las unidades para jóvenes dentro de los establecimientos penitenciarios y en los centros socioeducativos que alojan a adolescentes bajo control penal y, en algunos anexos en contextos de encierro, se implementaron coros del Programa Orquestas y Coros Infantiles para el Bicentenario.

En síntesis, tanto el marco político como las acciones desarrolladas representaron un giro sustantivo en las políticas para la EPJA y en contextos de encierro. Ello no obstante los aspectos insuficientes de algunas de esas acciones y de las dificultades en el acceso a la educación que aún persisten en contextos de privación de libertad, y en el medio externo señalados por diferentes autores y en trabajos propios o en coautoría (Acin & Madrid, 2015; Acin, 2016; Acin, Castagno & Madrid, 2016).

Interrogantes en el nuevo escenario político del país

La asunción al gobierno de la coalición Cambiemos configura un escenario orientado a construir otro modelo de sociedad y de país, con retorno a políticas neoliberales en lo económico y neoconservadoras en lo político, y fuerte hegemonía cultural y comunicacional.

Respecto a las modalidades objeto de análisis, en el primer año de gobierno de esta coalición primó una suerte de indefinición en la EPJA, expresada en los cambios de las autoridades de la Dirección, no así en la Coordinación Nacional de Educación en Contextos de Encierro cuyas autoridades continuaron. Tras las demoras y falta de definición inicial, los programas nacionales en términos generales continuaron, en muchos casos con cambios de orientación, y disminuyeron las convocatorias a las Mesas Federales.

Posteriormente, la reestructuración del Ministerio de Educación y Deportes implicó la disolución de esas unidades gubernamentales. Si bien en el organigrama del Ministerio la Dirección de EPJA y la Coordinación de Educación en Contextos de Encierro están bajo la dependencia de la Secretaría de Gestión Educativa, fuentes orales mencionan que no se han designado autoridades para la EPJA y el personal habría sido incorporado a Formación Profesional en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Probablemente la acción más relevante en la actualidad es la articulación EPJA y FP que comprende a la EPJA y a la educación en contextos de privación de libertad. En Córdoba la articulación se incrementó en numerosos centros educativos, en continuidad con acciones iniciadas en 2014, extendiéndose a todos los anexos en contextos de privación de libertad bajo una Coordinación al interior de la DGEJA a fin de fortalecer tal articulación.^{iv}

Para finalizar, a juzgar por una serie de definiciones de política educativa general y de iniciativas como el Plan Maestro, contrarias a los principios de la LEN, me interrogo acerca del rumbo futuro de la LEN ya que después de enunciar que se fundamenta en ella y se garantiza el derecho a la educación, se proponen acciones que contradicen sus principales principios y, de aprobarse, dejarían sin efecto parte de su articulado.

En el documento analítico de ese Plan, realizado por docentes pertenecientes a carreras de Ciencias de la Educación del país (pp. 3 y 4), se menciona la preocupación por la perspectiva prevalente que reduce el sistema educativo a la función de “formación de recursos humanos del país y fomento de la competitividad”, que intenta combinarse con la que es explícita en el art. 2 de la LEN: “la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado ...”

Ese documento expresa, asimismo, que el desconocimiento del ordenamiento vigente se extiende a distintas áreas. Por ejemplo, en la sección dedicada a educación y trabajo (capítulo 6 del PEM) no hay referencias a la Ley 26.058 de Educación Técnico- Profesional y sus instrumentos (el Fondo de Mejora, el Catálogo de Títulos y Certificaciones, el Catálogo de Instituciones de ETP), ausencia que genera interrogantes sobre su futuro. En el mismo sentido se interpreta la ausencia de referencias del PEM sobre las modalidades que establece la LEN, entre ellas la educación intercultural bilingüe o la educación de jóvenes y

adultos. Y concluye que “...definir políticas –como lo hace el PEM- ignorando las modalidades parece constituir un desconocimiento de la LEN.”

En función de lo expuesto, considero central promover acciones de concientización de los docentes de todos los niveles educativos, junto a intelectuales, artistas, otros trabajadores y legisladores a fin de preservar esta normativa. No obstante las críticas que hayamos efectuado y continuemos haciendo respecto a las omisiones del estado o de las acciones incumplidas respecto a la LEN, ésta constituye una plataforma básica para exigir el respeto al derecho a la educación, cuya anulación nos dejaría en una situación indemne que profundizaría la tendencia a desandar el camino costosamente transitado en los últimos años.

Bibliografía

- Acin, A. (2016a). Derecho a la educación secundaria de jóvenes y adultos: nuevas oportunidades y dificultades que persisten en Alicia Acin et al *El desafío de la inclusión en el nivel medio y superior*. Buenos Aires: Editorial Noveduc. pp. 37-59.

Acin, A. (2013). “La educación secundaria de adultos en la actualidad. Un estudio comparado entre Córdoba (Argentina) y Cataluña (España)”, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona. Disponible en el repositorio TDX de la UB. URL: <http://hdl.handle.net/10803/134726>

- Acin, A; Castagno, M. y Madrid, B. (2016). La educación pública en contextos de privación de libertad en argentina y en córdoba: balance de una década. En Beahares y Rodríguez Giménez (Orgs.). *VII Encuentro Internacional de Investigadores de políticas educativas*. Asociación de Universidades Grupo Montevideo. pp. 17-24.

- Acin, A.; Madrid, B. (2015). Acceso a la educación en el espacio carcelar: entre la ampliación y las barreras que se interponen. *CD-ROM IX Jornadas de Investigación en Educación “Políticas, Transmisión y Aprendizajes. Miradas desde la Investigación Educativa”*.

- Gutiérrez, M. (2012). Leyes: lo que dicen y lo que traen sin decir en Mariano Gutiérrez (Comp.). *Lápices o rejas. Pensar la actualidad del derecho a la educación en contextos de encierro*. Buenos Aires: Editores del Puerto. pp. 231-258.

- Rodríguez, L. (2008). *Situación presente de la educación de personas jóvenes y adultas en Argentina*. México: CEAAL-CREFAL.

- Argentina. Consejo Federal de Educación. Resol. CFE N° 118/10. *Educación permanente de jóvenes y adultos-Documento Base y Lineamientos curriculares para la EPJA*. (septiembre de 2.010).
- Argentina. Consejo Federal de Educación. Resol. CFE N° 127. *La educación en contextos de privación de la libertad en el sistema educativo nacional*. (diciembre de 2.010).
- Argentina. Ley Federal de Educación N° 24.195. BO núm. 27.632, p. 1. (1.993).
- Argentina. Ley de Educación Nacional N° 26.206. BO núm. 31.062 (2.006).
- Argentina. Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad. (julio de 1.996) y Ley 26.695 Modifica ley 24.660 sobre ejecución de la pena privativa de libertad. (junio de 2.011).
- Córdoba. Ley de Educación Provincial 9870, de 15 de diciembre de 2010.
- Argentina. *Análisis sobre el denominado “Plan Educativo Maestr@” del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación*. Documento elaborado por las carreras de Educación (Profesorado y Licenciatura) de las Universidades Nacionales (mayo de 2017).

ⁱ Esta es la denominación que adopta la LEN, mientras que en la Ley de Educación Provincial 9.870/10 es educación de jóvenes y adultos.

ⁱⁱ Se realizó en la Universidad de Barcelona entre 2011 y 2013, bajo la dirección de la Dra. Ana Ayuste, continuando una investigación anterior desarrollada en Córdoba, con sede en el CIFFyH, UNC. La comparación se basó en análisis documental, entrevistas semi estructuradas a actores clave, grupo de discusión y observación en algunos centros educativos para adultos.

ⁱⁱⁱ Acceso a derechos y a justicia en el espacio carcelar, dirigida por Ana Correa y co dirigida por Alicia Acin, con sede en el CIFFyH y subsidio de la Secretaría de Ciencia y Técnica-UNC 2016-2017, con base en un diseño cualitativo.

^{iv} Dicha articulación posibilita que los estudiantes egresen con doble certificación –la correspondiente al nivel educativo y la certificación de la Formación Profesional– y da respuesta a expectativas de los estudiantes relacionadas con la formación para el desempeño laboral. Asimismo, en los contextos de encierro se valora porque ello implica mejores condiciones de las personas privadas de libertad para afrontar un mercado de trabajo altamente selectivo, especialmente para quienes tienen antecedentes penales.